

# LAS PERSONAS ADULTAS BAJO LA TUTELA PÚBLICA. ESTUDIO COMPARADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

## ADULT WARDS OF THE STATE. COMPARATIVE STUDY OF PUBLIC GUARDIANSHIP IN SPAIN'S AUTONOMOUS COMMUNITIES

Joaquín Moreno Serrés

*Dirección General de Planificación y Aseguramiento. Zaragoza*

**Resumen:** En estos últimos años, los órganos de gobierno de las diferentes comunidades autónomas han asumido las tutelas de personas adultas que, por diferentes causas, no tienen ningún familiar que pueda hacerse cargo de las mismas. Por ello analizamos primeramente la figura de la tutela desde la perspectiva del ámbito legal. A continuación se exponen dos ejemplos que dibujan el perfil de los usuarios tutelados por las administraciones públicas. Para finalizar se dará unas pinceladas sobre el estudio comparado sobre la tutela realizado en diferentes comunidades autónomas.

**Palabras Clave:** Tutelas, Incapacidad, Juez, Fiscal, Tutor.

**Abstract:** In recent years, the governing bodies of the Autonomous Communities have assumed the guardianship of adults who for various reasons have no relatives that can take care of them. First we analyze the figure of guardianship from the legal perspective. Then two common examples of adults under the care of the government are described. Finally, we present some aspects of a comparative study on guardianship in different regions.

**Key Words:** Guardianship, Disability, Judge, Prosecutor, Guardian.

| Recibido: 07/03/2014 | Revisado: 15/05/2014 | Aceptado: 01/07/2014 | Publicado: 30/09/2014 |

*Correspondencia:* Joaquín Moreno Serrés. Inspector de Centros Sociales. Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. Dirección General de Planificación y Aseguramiento. C/ Vía Universitat, 36 1ª Planta. 50017 Zaragoza. Tlf. 976715596. Email: jmorenos@aragon.es.

*Referencia normalizada:* Moreno, J. (2014). Las personas adultas bajo la tutela pública. Estudio comparado por comunidades autónomas. *Trabajo Social Hoy*, 73, 103-118. doi: 10.12960/TSH.2014.0018.

## 1. INTRODUCCIÓN

Desde la reforma del Código Civil en materia de derecho de familia del año 1983, es posible que el ejercicio de los nombramientos tutelares se realice no solo por personas físicas, sino también por Entidades, tanto públicas como privadas.

En este sentido, desde las distintas administraciones públicas se han articulado mecanismos de protección jurídica de personas dependientes, creándose en algunas comunidades autónomas órganos específicos dedicados al ejercicio de la tutela y curatela de personas incapacitadas judicialmente.

Este es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón, en donde existe la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos, creada en 1998 mediante el Decreto 168/1998 de 6 de octubre. Norma que fue modificada en 2004, mediante el Decreto 13/2004 de 27 de febrero.

La Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de Aragón es la persona jurídica que ejerce la tutela, curatela y el cargo de Defensor Judicial de las personas mayores de edad incapacitadas judicialmente cuando dichas funciones le sean encomendadas por resolución judicial.

El hecho de que en el territorio español cada comunidad autónoma esté asumiendo la tutela de personas adultas, según su propia normativa, nos plantea el interrogante de cómo se gestiona este tema, si es a través de entidades públicas, privadas o mediante un sistema mixto, con la participación tanto de entidades de carácter público como privado.

Asimismo, dentro del colectivo de las personas adultas incapacitadas y tuteladas por la administración, aquellas que padecen enfermedades mentales constituyen un grupo numeroso y al que hay que prestar una especial atención, dada la problemática social, familiar, laboral y económica que les rodea.

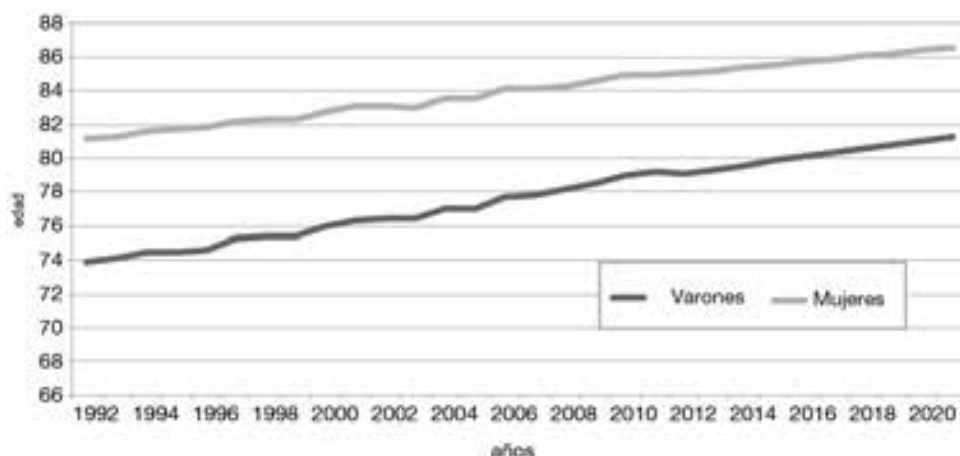
Con el fin de responder a estos interrogantes, se plantea una investigación descriptiva, recogiendo información de las diferentes comunidades autónomas en aspectos concretos que nos interesa conocer en relación, fundamentalmente, al modelo de gestión del ejercicio de la tutela de personas adultas.

La importancia de realizar esta investigación viene dada por la necesidad de disponer de una visión general del modo de ejercer la tutela de personas adultas cuando esta no recae en familiares del tutelado, en el territorio español, y tener una visión comparativa de las diferencias en cuanto a la gestión en las comunidades autónomas.

En la actualidad los factores socio-demográficos que explican, en gran parte, el importante incremento de personas adultas que son susceptibles de encontrarse en situación de incapacidad y por tanto susceptibles de ser tuteladas son:

- El progresivo aumento del envejecimiento de la población que propicia un mayor número de enfermedades y demencias seniles.
- El incremento de las enfermedades mentales, consecuencia en algunos casos de trastornos relacionados con el alcoholismo o la drogadicción.

El envejecimiento de la población constituye una importante realidad en nuestras sociedades avanzadas. Esto se produce como resultado del importante avance socio-sanitario y cultural vivido en los países occidentales. La esperanza de vida al nacer es cada vez mayor en España. En el año 2012, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se situaba en 79,26 años para los hombres y en 85,01 para las mujeres. En el Cuadro 1 podemos observar la proyección a corto plazo de la esperanza de vida al nacer en España.



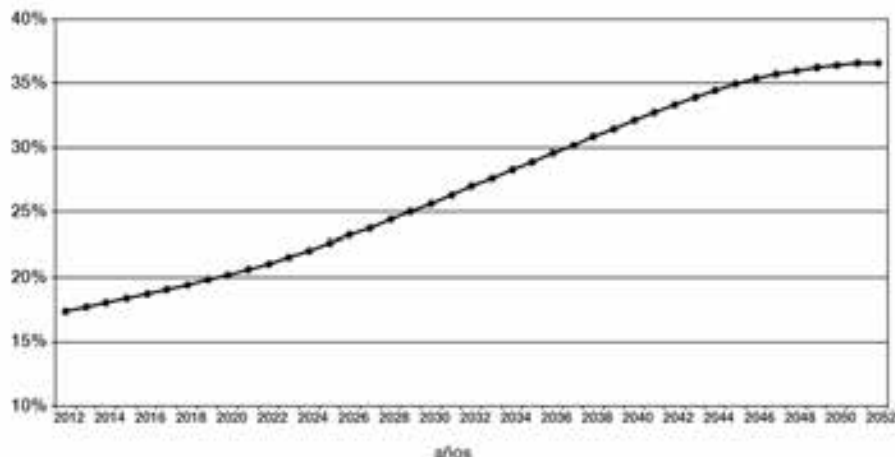
Cuadro 1. Proyección esperanza de vida al nacer

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. INE.

En nuestro país, los mayores de 65 años representan en el año 2012 un 17,38 % del total de la población, estableciéndose un proceso de crecimiento progresivo como reflejan las tendencias de población.

En el Cuadro 2 podemos observar la futura evolución del porcentaje de mayores sobre el total de población, que llegaría a un 35 % del total de la población en el año 2045 y a

partir de ahí se suavizaría su incremento hasta el año 2052, fecha en la cual alcanzaría un 36 % sobre el total de la población.



Cuadro 2. Proyecciones de población a largo plazo 2012-2052. INE

Fuente: INE.

Las personas que tienen una gran dependencia del alcohol y las drogas es más probable que sufran problemas de salud mental, tales como depresiones o ansiedad severa, ver cosas extrañas o tener alucinaciones, desconfiar de otras personas y sufrir episodios de retorno al pasado (Cuadrado, 2009).

Los trastornos mentales relacionados con sustancias se pueden dividir en dos grandes grupos:

- Los que son consecuencia de los efectos fisiológicos directos de las drogas o de sus derivados sobre el sistema nervioso central.
- Los que tienen que ver con la relación de la persona con el consumo.

La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción ha alertado que: *“El incremento de determinadas enfermedades mentales, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar, está ligado al consumo de drogas”*.

Este grupo de personas, si no cuenta con apoyos familiares o de su entorno próximo, suele ser candidato a caer en la marginalidad y a sufrir procesos de incapacitación, lo que hace necesario la asunción de tutela por parte de las administraciones públicas o bien por fundaciones tutelares (Cuadrado, 2009).

## 2. LAS PERSONAS ADULTAS BAJO LA TUTELA PÚBLICA

La incapacidad es una situación de hecho, de carácter permanente, que priva a algunas personas de su capacidad de obrar. Para proteger a estos individuos que no poseen una voluntad consciente y libre, ni suficiente discernimiento para adoptar las decisiones adecuadas en la esfera personal y en la de administración de sus bienes, la ley ha previsto la declaración de incapacidad.

El ordenamiento jurídico impone que la incapacitación sólo puede declararla un juez mediante sentencia, tras haberse tramitado el oportuno procedimiento judicial (Código Civil, art. 199). La incapacitación hay que entenderla en un sentido positivo, pues tiene por finalidad posibilitar que personas sin capacidad, o con su capacidad disminuida, puedan actuar a través de sus representantes legales, o con la debida asistencia (De Couto, 1999).

Este procedimiento puede ser iniciado por el cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos de la persona sobre la que se solicite la incapacidad. También lo puede solicitar la propia persona necesitada de protección. Además, el Ministerio Fiscal lo puede promover cuando las personas mencionadas no existieran o no la hubieran solicitado (Código Civil, art. 204).

El procedimiento se inicia mediante un escrito de demanda, en el que se pone en conocimiento del juez la existencia de una persona con presunta falta de capacidad, y en el que también puede solicitarse que se le nombre un representante legal (Ley de Enjuiciamiento Civil, art. 757).

Practicadas todas las pruebas y celebrado el acto de la vista, el juez dictará sentencia en la que determinará la extensión y límites de la incapacidad solicitada, y establecerá el régimen de guarda al que el incapaz debe quedar sometido. Puede declararse la incapacidad total si se aprecia que la persona no es capaz de cuidar de su persona, ni de administrar sus bienes o la incapacidad parcial cuando se estime que la persona puede realizar determinados actos por sí solo.

Por último, la sentencia determinará la persona o institución que va a ejercer la guarda del incapaz, nombrando tutor o curador al interesado, o bien, prorrogando o rehabilitando la patria potestad de sus progenitores.

Declarada la incapacidad, total o parcial, de un individuo mediante sentencia judicial, el siguiente paso es nombrar a la persona o entidad que le va a representar para todos aquellos actos que no pueda realizar por sí solo.

Las distintas figuras de protección de las personas incapaces, que establece el ordenamiento jurídico son: la patria potestad, la tutela, la curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho (Código Civil, art. 215).

La tutela es la institución de guarda que procede cuando se declara la incapacidad total de una persona, para regir su persona y sus bienes, en sustitución de la patria potestad ejercida por los padres (Código Civil, art. 222-233). Para el ejercicio de dicha tutela, el juez nombrará un tutor, para lo que el Código Civil establece un orden de preferencia, si bien puede designar tutor a cualquier persona física o jurídica que considere idónea.

Las diferentes administraciones públicas de las Comunidades Autónomas, bien a través de órganos creados “ad hoc” para la gestión de tutelas o bien a través de fundaciones tutelares ejercen las diferentes figuras de protección de personas incapacitadas judicialmente, bien porque no tienen familia directa que puedan hacerse cargo de ellos, o bien porque dicha familia no esté capacitada para la asunción de la misma. A continuación se detalla el estado de algunas Comunidades Autónomas:

*Comunidades Autónomas con organismos propios:*

Aragón.- Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos.

Asturias.- Letrado del Anciano.

Madrid.- Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

*Comunidades Autónomas con fundaciones tutelares públicas:*

Castilla y León.- Fundación Acción Social y Tutela.

La Rioja.- Fundación Tutelar de La Rioja.

Murcia.- Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de adultos.

Navarra.- Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas

*Comunidades Autónomas que ejercen las tutelas a través de fundaciones tutelares:*

Andalucía.

Cataluña.

### 3. EJEMPLOS DE PERSONAS TUTELADAS

A continuación se exponen algunos casos de personas tuteladas.

#### CASO I

Antonio e Isabel viven en Pinto (Madrid) junto con su hijo Eduardo. Antonio ha trabajado toda su vida repartiendo bebidas, y actualmente está jubilado. Su mujer Isabel ha sido toda su vida ama de casa al cuidado de sus hijos. Ambos son analfabetos y les ha costado mucho sacar adelante a su descendencia.

Eduardo tiene 35 años, está soltero y vive con sus padres. Padece una esquizofrenia mental de grado medio y, a causa de su adicción a las drogas, ha estado interno en un centro de desintoxicación de la Comunidad de Madrid.

Tras su salida del centro de desintoxicación, Eduardo empezó a tener muchos problemas con sus padres, y estos acudieron al Centro Municipal de Servicios Sociales de Pinto y le expusieron su problemática a la trabajadora social. Esta, tras estudiar su situación, instó al juzgado para que se realizara un procedimiento de incapacidad de Eduardo, y que la Comunidad Autónoma de Madrid, a través de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, ejerciera la tutela efectiva de Eduardo, ya que sus padres no estaban capacitados para la misma.

Ahora, la Agencia Madrileña le controla su pensión de invalidez absoluta. Noelia, trabajadora social de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, se encarga de su atención social y económica. Le asegura una renta semanal para sus gastos y otra cantidad se la entrega a sus padres para que se hagan cargo de su manutención.

Actualmente, Eduardo lleva una vida más estructurada y padece menos brotes por su enfermedad mental. Sus padres están muy satisfechos por el seguimiento que realiza la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, y ha mejorado mucho su calidad de vida.

En la última entrevista, en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Pinto, Eduardo manifiesta: “Ahora me encuentro mucho más protegido, me administro mejor el dinero de la pensión y no me muevo tanto por mis impulsos. La relación con mis padres ha mejorado, mi madre no podía conmigo (insultos, golpes, robos,...). Habitualmente estaba mucho en la calle y en ocasiones seguía tomando drogas”.

Ahora Eduardo considera a los trabajadores de la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos “como una familia”, acude semanalmente a recibir su paga y la trabajadora social realiza visitas periódicas a su domicilio. Actualmente la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos tiene bajo su responsabilidad de tutela a 1 404 personas no institucionalizadas en centros.

## CASO II

Timoteo nació en Quinto de Ebro (Zaragoza). Después de la Guerra Civil, y con cinco años, emigró a Francia junto con sus padres. Su padre trabajaba como empleado en una granja agrícola en el sur de Francia y, a su fallecimiento, Timoteo ocupó su puesto como peón en dicha granja.

Tras 40 años de duro trabajo en la granja, le llegó la hora de la jubilación. Timoteo no tenía ninguna raíz familiar en Francia, y optó por regresar a su pueblo, Quinto, para pasar lo que le quedaba de vida, porque allí residían algunos primos

Una vez en Quinto, alquiló una vivienda. Realizaba una vida activa participando en varios grupos sociales: actividades del hogar de jubilados, peña gastronómica de amigos, asociación cultural de amigos de los animales, etc.

Pero a los cinco años de vivir en el pueblo, empezó a tener lagunas de memoria y a no acordarse de cosas. Fue al médico y le diagnosticaron Alzheimer. Timoteo, a instancia del médico, acudió al Servicio Social de Base de Quinto y le expuso su problema a la trabajadora social. Esta, viendo que Timoteo no tenía familiares directos que pudieran hacerse cargo del él, contactó con la Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón, para promover su incapacidad y la asunción de su tutela por dicha comisión. Una vez resuelta la incapacitación y la tutela de Timoteo, la comisión de tutelas decide su ingreso en un centro residencial para mayores cercano a Zaragoza, previa autorización judicial, debido a su evidente deterioro cognitivo.

En un principio la residencia le cobraba una cuota como usuario válido, y tenía suficiente con su pensión para hacer frente a los gastos residenciales. Una vez al mes la trabajadora social de referencia de Servicio Social de Base le hacía una visita para hablar con él y ver cómo se encontraba en el centro. A los dos años de estar en la residencia, Timoteo se deterioró debido a que su enfermedad se agravó, y el centro residencial tuvo que trasladarlo a una plaza de asistido, con lo que le aumentó la cuota a pagar y con su pensión no le llegaba a sufragar este gasto. Ante lo cual, la comisión de tutelas le gestionó una solicitud de plaza pública del Gobierno de Aragón, y así sólo pagaría un 80 % de su pensión, sufragando el resto del coste el Gobierno de Aragón. A los seis meses se le concedió plaza pública en el mismo centro y así Timoteo ha podido continuar en él, puesto que estaba adaptado y a gusto en el mismo. La Comisión de Tutelas y Defensa Judicial de Adultos del Gobierno de Aragón tiene bajo su responsabilidad de tutela a 645 personas institucionalizadas en centros.

#### **4. ESTUDIO COMPARADO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS**

El hecho de que en el territorio español, cada comunidad autónoma esté asumiendo la tutela de personas adultas, según su propia normativa, nos plantea el interrogante de cómo se gestiona este tema, si es a través de entidades públicas, privadas o mediante un sistema mixto, con la participación tanto de entidades de carácter público como privado.

Con el fin de responder a estos interrogantes, se plantea una investigación descriptiva, recogiendo información de las diferentes comunidades autónomas en aspectos concretos que nos interesan conocer en relación, fundamentalmente, al modelo de gestión del ejercicio de la tutela de personas adultas. En cuanto a los objetivos específicos planteados son los que se enumeran a continuación:



1. Determinar la legislación utilizada por las diferentes Comunidades Autónomas para la regulación legal del tema de la tutela de adultos.
2. Conocer las diferentes formas jurídicas que utilizan las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la gestión de la tutela de adultos.

El ámbito de investigación lo constituyen las unidades o servicios, de las comunidades autónomas españolas, que son responsables del ejercicio de la tutela, por parte de la administración, de personas adultas incapacitadas. El periodo cronológico en el que se centra la investigación es el mes de noviembre y diciembre de 2013. Se elaboran a su vez 4 hipótesis de trabajo para su posterior verificación:

Hipótesis 1.- “El 100 % de las comunidades autónomas dispone de un marco legal que regula el ámbito de la tutela de adultos”. En efecto el 100 % de las comunidades autónomas dispone de un marco legal que regula el ámbito de la tutela de adultos. Por tanto se cumple nuestra primera hipótesis.

Hipótesis 2.- “Al menos el 75 % de las comunidades autónomas utiliza como modelo de gestión de la tutela de adultos un organismo público”. De las 17 comunidades autónomas, un 65% utiliza un organismo público para ejercer la gestión de las tutelas de adultos y un 35% ejerce la tutela de adultos de forma privada o mixta. Por tanto no se cumple nuestra segunda hipótesis por un estrecho porcentaje.

Hipótesis 3.- “El 75 % de entidades privadas que gestiona la tutela de adultos son fundaciones”. En este caso el 100 % de entidades privadas que gestionan la tutela de adultos son fundaciones. Por tanto se cumple nuestra tercera hipótesis.

Hipótesis 4.- “El 25 % de las comunidades autónomas tiene asumida la competencia de defensa judicial” La competencia de defensa judicial de adultos está asumido a nivel nacional por el 76 % de las comunidades autónomas, junto con la tutela y la curatela son las competencias en mayor medida asumidas. Con este dato se puede afirmar que se ha cumplido ampliamente la hipótesis.

Para la recogida sistemática de la información se elabora un cuestionario, basado en las anteriores hipótesis a verificar, a cumplimentar por las diferentes comunidades autónomas y una ficha en la que se recoge y analiza la información necesaria para conseguir los objetivos planteados.

#### **4.1. TIPO DE GESTIÓN**

La mayoría de las comunidades autónomas han apostado por un tipo de gestión a través de la administración pública, con algunas excepciones que optan por un modelo de gestión a través de fundaciones privadas (ver Figura 1). En el caso de La Rioja se toma el camino de en medio, gestionando a través de una Fundación de carácter

público-privado. En el caso del País Vasco, Álava y Guipuzcoa se inclinan por fundaciones privadas y Vizcaya por la gestión pública.

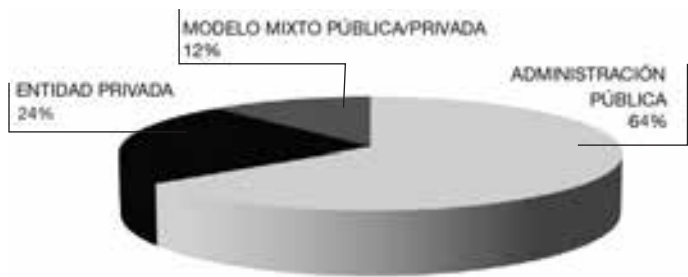


Figura 1. Gestión de la función tutelar por parte de las CC.AA.  
Fuente: Elaboración propia.

4.2. FORMA JURÍDICA DE LA ENTIDAD

De las 17 comunidades autónomas, 11 se han decantado por la figura de la fundación y 6 de ellas por una gestión directa a través de la administración pública. Las seis figuras de la administración pública son:

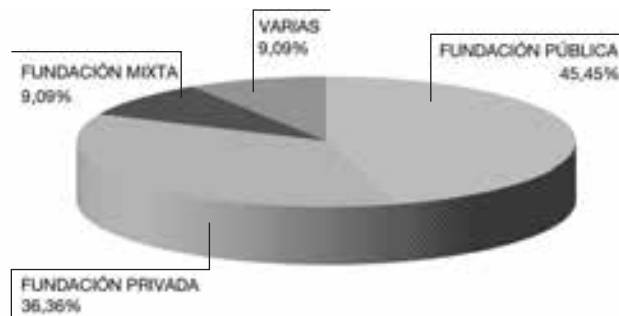
- Aragón.- Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos.
- Asturias.- Letrado del Anciano
- Canarias.- Comisión Tutelar del Mayor
- Extremadura.- Comisión Tutelar de Adultos.
- Madrid.- Agencia Madrileña de Tutela de Adultos.
- Valencia.- Comisión Valenciana de Tutelas

Tabla1. Formas jurídicas de las entidades

	TOTAL CC.AA.	FUNDACIÓN	ASOCIACIÓN	COOPERATIVA	OTROS
Nº TOTAL	17	11	0	0	6
%	100 %	64,71 %	0,00 %	0,00 %	35,29 %

Fuente: Elaboración propia.

De las 11 comunidades autónomas que gestionan las tutelas a través de fundaciones, 5 lo hacen a través de fundaciones de carácter público, 4 a través de fundaciones de carácter privado, la Comunidad Autónoma de La Rioja a través de una fundación de carácter público-privada y el País Vasco lo gestiona tanto de forma privada como de forma pública (ver Figura 2).



**Figura 2.** Características de las Fundaciones que ejercen la acción tutelar.

Fuente: Elaboración propia.

### 4.3. MARCO LEGAL QUE REGULA LA GESTIÓN

De las 11 comunidades autónomas que han cumplimentado el apartado del marco legal, la mayoría hacen referencia al código civil, y en todas se hace referencia a leyes y decretos de regulación estatal y autonómica.

#### *Andalucía*

Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela, ha permitido que el cargo de tutor/a pueda ser ejercido por personas jurídicas, además de por personas físicas.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad.

#### *Aragón*

Decreto 168/1998, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos.

Decreto 13/2004, de 27 de enero, por el que se modifica el Decreto 168/1998, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón por el que se crea la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos.

#### *Asturias*

Ley 7/1991, de 15 de abril, de Asistencia y Protección al Anciano del Principado de Asturias.

Decreto 21/2006, de 2 de marzo, por el que se regula la constitución y funcionamiento de la Comisión de Tutelas del Principado de Asturias.

***Canarias***

Ley 3/1996, 11 de julio Participación de las Personas Mayores y de la Solidaridad entre Generaciones, en su artículo 34, se crea la Comisión Tutelar del Mayor legalmente Incapacitado.

***Castilla-La Mancha***

Decreto 71/1997, de 17 de junio, de la Comisión de Tutela de Castilla La Mancha. Castilla León.

Ley 13/2002 de Fundaciones de Castilla y León y Estatutos de la Fundación Acción Social y Tutela.

***Cataluña***

Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia.

Cartera de Servicios Sociales.

***Extremadura***

Decreto 52/1996, de 9 de abril, por el que se crea la Comisión Tutelar de Adultos de Extremadura.

***Galicia***

Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de Fundaciones de interés gallego.

Decreto 14/2009, de 21 de enero, del Reglamento de Fundaciones de interés gallego.

Decreto 15/2009, de 21 de enero, reglamento del Registro de Fundaciones de interés gallego.

***La Rioja***

Ley 7/2009, de 22 de diciembre de Servicios Sociales de la CA de La Rioja.

Ley 5/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones.

Ley 1/2007 de 12 de febrero de Fundaciones de la CA de La Rioja.

Estatutos de la Fundación Tutelar de La Rioja de 28 de abril de 2009, que modifican los Estatutos de la Fundación Tutelar de la Rioja de fecha 16 de mayo de 2003.

***Madrid***

Ley 4/1995, de 21 de marzo de creación de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.

**4.4. NOMBRES DE LAS ENTIDADES**

En Andalucía la gestión es privada y la encomienda corresponde a fundaciones de ámbito provincial (en algunos casos como el caso de Jerez, municipal); en algunas provincias existe una única fundación que asume todos los casos de tutela, sin dife-

renciar la motivación, en otras, se han constituido diferentes fundaciones en función de si el caso a tutelar corresponde a persona mayor, discapacitado intelectual, enfermo mental u otros. Las fundaciones actualmente ocupadas de la gestión de la tutela en Andalucía son: Instituto Almeriense de Tutela, Fundación Almeriense de Tutela, Afanas Bahía de Cádiz, Afanas Jerez, Asprodeme Asansull, Fundación Gaditana de Tutela, Promi, Fundación Cordobesa de Tutela, Futuro, Fundación Granadina de Tutela Fundación Onubense de Tutela Fundación Jienense de Tutela Fundaspadem, Fundación Malagueña de Tutela Nadir, Tau, Fundema, García Blanco.

En Aragón la gestión es pública y corresponde a la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA). La gestión corresponde a las direcciones provinciales de cada una de las tres provincias aragonesas.

En el caso de Asturias corresponde al Letrado del Anciano del Principado de Asturias. Islas Baleares, gestión privada encomendada a diferentes fundaciones en función del objeto de la tutela. Así constan actualmente la Fundació Tutelar de persones amb discapacitat intel·lectual de Mallorca (AMADIP.ESMENT), Fundación Síndrome de Down de Islas Baleares Fundación Tutelar Mater Misericordiae, Fundación Tutelar CIAN (AMADIBA), Servei de Tutela Fundación ALDABA, Servei Tutelar de la Fundació APROSCOM, Fundació Tutelar DEMÀ per malalts mental.

Islas Canarias gestión pública a cargo de la Comisión Tutelar del Mayor legalmente Incapacitado; y en Cantabria, gestión pública correspondiendo a la Fundación Marques de Valdecilla.

En Castilla la Mancha existe la Comisión de Tutela de Castilla La Mancha de carácter público, pero la fórmula de gestión del servicio es indirecta, existen cinco fundaciones de carácter privado cada una orientada a una incapacidad (personas mayores, enfermos mentales, daño cerebral sobrevenido y discapacidad intelectual) todas son de ámbito regional y además una que se ocupa de tutelar a las personas con enfermedad mental en la provincia de Albacete. Por otra parte, desde el año 2009 la comisión de tutela colabora con la Fundación Socio Sanitaria de Castilla La Mancha (de carácter público) y orientada a la tutela de personas con enfermedad mental, diagnóstico dual o conductas adictivas.

Castilla y León, por su parte, asume la gestión de la tutela con carácter público, a través de la Fundación Acción Social y tutela de Castilla y León, de ámbito regional.

En el caso de Cataluña consta que a nivel regional la gestión es privada, conociendo los datos únicamente de dos de las provincias, es el caso de Barcelona cuya gestión corresponde a la Fundación privada tutelar ACIDH y de Gerona, a través de la Fundació Tutelas de les Comarques Gironines. Lérida y Tarragona no han proporcionado datos.

Extremadura, gestión pública de carácter regional a cargo de la Comisión tutelar de adultos de Extremadura. En referencia a Galicia, la gestión es también pública y de carácter regional, correspondiendo a la Fundación Pública Galega para a Tutela de Personas Adultas. La Rioja plantea una gestión mixta a través de la Fundación Tutelar de La Rioja. En el caso de Madrid, la gestión es pública a través de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Murcia es de gestión pública a través de la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de adultos. La misma situación en Navarra, en este caso a través de la Fundación Navarra para la Tutela de Personas Adultas.

En el País Vasco, la gestión es privada en dos provincias y pública en una. Así en el caso de Álava, la gestión es privada a través de la Fundación Tutelar Beroa y de la Fundación Usoa. Lo mismo que en Guipuzcoa a través de la Fundación Hurkoa. En Vizcaya la gestión es pública a través del Instituto Tutelar de Bizkaia.

Y finalmente, en la Comunidad Valenciana la gestión es regional y pública mediante la Comisión valenciana de Tutelas y Defensa Judicial de incapacitados.

A modo de conclusión, en España la gestión de la tutela con carácter general es de ámbito regional, salvo en los casos de Andalucía, Cataluña y País Vasco que es de carácter provincial incluso municipal, en estos casos la gestión es privada salvo en el caso de Vizcaya.

El ejercicio de la tutela, ya sea de carácter privado o público, en un 64.71 % se encomienda a una fundación, salvo en el caso de Madrid que crea la figura de la Agencia o las Comisiones de Tutelas en los casos de Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Canarias y el caso excepcional de Asturias con la figura del Letrado del Anciano.

#### 4.5. COMPETENCIAS QUE GESTIONA LA TUTELA DE ADULTOS

Respecto a las competencias se nombraban en el cuestionario explícitamente: la tutela, la curatela, la defensa judicial de adultos, la guarda y otros. Los resultados del cuestionario aparecen representados en la siguiente figura.



Figura 3. Número de Comunidades Autónomas según figuras de protección.

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido se ha obtenido respuesta de las 17 comunidades autónomas, y así el 100% señala como competencia la tutela.

En el caso de la curatela el porcentaje se modifica ligeramente, 16 ejercen esta competencia, un total del 94 %.

En el caso de la defensa judicial baja a 13 comunidades autónomas, lo que representa un porcentaje del 76 %.

Respecto a las guarda, solo 3 comunidades autónomas la ejercen: Aragón, Canarias y Cantabria, un 18 % de las CC.AA. Y por último, el apartado de otros, es la situación del 41%, aclarar que en este apartado se refieren concretamente a Galicia: Administración de bienes, Madrid: Administración provisional, Cataluña-Gerona: Administración patrimonial, asistencia, Cataluña-Barcelona: Administración patrimonial y patrimonio protegido.

A estos indicadores porcentuales a nivel individual se considera necesario añadir un último resultado que viene a señalar que el 76 % de las comunidades autónomas tienen competencias en tutela, curatela y defensa judicial de adultos. Caso excepcional lo representa la Comunidad Autónoma Valenciana que solo ejerce tutelas y Castilla La Mancha y País Vasco que solo ejercen tutelas y curatelas.

## 5. CONCLUSIONES

Todas las comunidades autónomas disponen de marco legal para regular el ámbito de la tutela de adultos. Ahora bien algunas hacen referencia a la legislación propia del Código Civil y alguna otra regulación generalista, y otras han desarrollado sus propios reglamentos en la materia.

De las 17 comunidades autónomas 6 de ellas han creado un organismo público para llevar a cabo la gestión de la tutela de personas que se encuentran bajo su protección. El resto de comunidades autónomas lo hace a través de fundaciones, bien de carácter público o privado.

Todas las comunidades autónomas que gestionan las tutelas de forma privada lo hacen a través de fundaciones, con una financiación como patrono dentro de las mismas o bien a través de convocatorias de subvenciones.

Prácticamente todas las comunidades autónomas ejercen competencias en tutelas, curatelas y defensa judicial de adultos.

Ha resultado más fácil obtener información de las comunidades autónomas que contaban con un organismo autónomo propio que gestionaba la competencia que de las otras que gestionaban la competencia a través de fundaciones.

A lo largo de todo este estudio hemos podido constatar la variopinta forma de acometer la competencia en la tutela de adultos por parte de las diferentes comunidades autónomas, pues aún en el caso de tener un órgano administrativo propio, cada uno de los mismos era totalmente diferente a los otros.

A su vez, las comunidades autónomas que gestionaban la competencia a través de fundaciones privadas, su participación en ellas era muy diferente, algunas formaban parte de su patronato y otras subvencionaban a través de convocatorias de subvenciones a las fundaciones que colaboraban en la tutelas de adultos.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

- Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (2007). *Tutela de Personas Adultas: Guía de Información y Recursos*. Madrid: Consejería de Familia y Asuntos Sociales.
- Cuadrado Calleja, P. (2009). *Alcoholismo y drogodependencias. Enfermería en psiquiatría y salud mental*. Madrid: Sociedad Española de Psiquiatría.
- De Couto Gálvez, Rosa María (1999). Los problemas legales más frecuentes sobre la tutela, asistencia y protección de personas mayores. *Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales*, 45.
- Fundación Tutelar de la Rioja. (2004). *Guía práctica sobre incapacidad judicial*. Logroño: Fundación Tutelar de la Rioja.
- Fundación Tutelar de la Rioja. (2005). *Jornadas sobre la protección jurídica en la incapacidad*. (26-27 de mayo, Logroño). Logroño: Fundación Tutelar de la Rioja.